

Eduardo Vergara es un colega cientista político y columnista del diario la segunda.cl. Eduardo muestra un especial interés por el tema de la descentralización del país, y ha escrito diferentes artículos relacionados sobre los beneficios que una mayor autonomía para las regiones podría significar, no sólo para un mejor desarrollo económico, sino también para una profundización y expansión de la participación ciudadana a nivel local. En este espacio podrán leer los trabajos de Eduardo:

1. **Regiones autónomas bajo un Chile federal**
2. **Regionalismo en Chile: ¿Empate, Local o Visita?**
3. **Los intendentes y la democracia regional.**
4. **Presupuestos participativos y promesas inconclusas**

1. Regiones autónomas bajo un Chile federal (por Eduardo Vergara Bolbarán, La Segunda.cl, 23 Octubre 2006). www.eduardovergara.cl



"El país debe considerar la opción de entregar autonomía amplia a sus regiones bajo la existencia de un sistema federal. Solo así, los gobiernos locales podrán autogobernarse, legislar con identidad, distribuir los fondos acorde a sus necesidades, despertar liderazgos representativos, ampliar la participación ciudadana y competir de manera más libre en la economía nacional y global. Bajo un sistema federal, los hoy limitados y poco democráticos gobiernos regionales cobrarán vitalidad real y sus localidades se transformaran en verdaderas escuelas de la democracia que transmitirán sus enseñanzas al nivel nacional".

No cabe duda que el incremento de la inversión en regiones potencia un crecimiento más equitativo; el florecimiento de nuevas vías para participar habla de una democracia que madura y se acerca a la gente; la constante competencia interna en partidos y coaliciones, a pesar del miedo que genera en los círculos oligárquicos de estos, demuestra tener el potencial de generar liderazgos más representativos y acordes a una sociedad más heterogénea; y que, la creación de nuevas herramientas por parte de las ONG permite a la ciudadanía exigir de manera más independiente y transversal transparencia y rendición de cuentas a quienes gobiernan.

Sin embargo, la carencia de un sistema descentralizado que entregue independencia y poder a las regiones y sus habitantes, hace que estas y otras iniciativas no se desarrollen en su amplio potencial, y que la idea de un gobierno más cercano a la ciudadanía sea atrayente en teoría, pero difícil de implementar en la práctica.

Desde los discursos Pipiolos que nacen alrededor de 1820 hasta los actuales intentos de la Concertación por entregar mayor protagonismo a las regiones, los esfuerzos por descentralizar el país han sido insuficientes y hablan de la mala disposición proveniente de la elite política por transferir el poder a los ciudadanos para que estos puedan ejercer su derecho a autogobernarse.

Si bien los gobiernos de la Concertación han cumplido parcialmente su compromiso con la descentralización del país, esta se ha disfrazado con iniciativas desconcentradoras, las cuales, al generar replicas del estado central a nivel micro (ej. Seremi), simplemente facilitan la ejecución de políticas de origen central en el nivel local.

Contrariamente, una descentralización real entregaría a las comunidades locales la capacidad de autogobernarse de acuerdo a necesidades que muchas veces difieren de los intereses centrales, generando además un gobierno con mayor identidad y un campo de juego más atrayente para sus ciudadanos.

Por otro lado, la ausencia de un debate y compromiso claro proveniente de la oposición no entrega mayores esperanzas para el futuro, e indirectamente avala la cómoda apatía proveniente de la Concertación.

Tal vez, el debate serio por parte de la hoy congelada oposición se puede transformar en una plataforma para facilitar su tan ansiada llegada al poder de manera democrática y por medio de este, articular un compromiso que ayude de manera real a terminar con las gigantes brechas que otros prometieron exterminar pero que no han podido cumplir.

Una sociedad no solo crece cuando en esta existe un óptimo acceso a recursos económicos y la posibilidad de competir libremente, sino que también, y de mayor manera, cuando en esta, las decisiones públicas se toman bajo el alero de la equidad y en un campo parejo donde todos tienen los mismos derechos y posibilidades de ejercer su ciudadanía.

Por ejemplo, este 7 de noviembre los ciudadanos en los EEUU, no solo elegirán sus líderes, sino que también podrán de manera directa, aceptar o rechazar cientos de 'iniciativas' de carácter local y 208 de contingencia específica para sus estados, siendo 81 de estas generadas directamente por grupos de ciudadanos.

En la ciudad de Hermosa Beach (California), donde hoy resido, los ciudadanos podrán votar en 7 categorías de liderazgo estatal (gobernador, contralor, etc.), 2 a nivel legislativo nacional (Senado y Cámara), 14 a nivel distrital (magistrados), 2 del condado (Asamblea y Senado estatal) y 14 proposiciones estatales (educación, obras públicas, financiamiento de campañas, etc.).

La existencia de un campo de participación amplia y directa aumenta el poder de los ciudadanos y fomenta su participación. Esto lo demostró un reciente estudio donde se estima que por cada 'iniciativa' que se somete a votación, la participación política aumenta en un 1.7%.

Sin embargo, la posibilidad de participar de esta manera solo se hace realidad bajo un sistema que permite a sus estados tener estructuras legislativas, gobiernos y leyes independientes, y que en contraste con Chile, otorga el derecho de elegir a sus líderes sin que estos sean impuestos por el gobierno central.

El país debe considerar la opción de entregar autonomía amplia a sus regiones bajo la existencia de un sistema federal.

Solo así, los gobiernos locales podrán autogobernarse, legislar con identidad, distribuir los fondos acorde a sus necesidades, despertar liderazgos representativos, ampliar la participación ciudadana y competir de manera más libre en la economía nacional y global.

Bajo un sistema federal, los hoy limitados y poco democráticos gobiernos regionales cobrarán vitalidad real y sus localidades se transformaran en verdaderas escuelas de la democracia que transmitirán sus enseñanzas al nivel nacional.

Finalmente y gracias al grado de autonomía política y fiscal que pueden llegar a tener las regiones en un sistema federal, estas pueden acercarse de mayor manera a ser territorios ideales para sus habitantes.

La educación, seguridad, salud y obras públicas pueden llegar a ser administradas de manera local, no solo con mayor eficiencia, sino que también con un importante grado de identidad. En esta búsqueda por un carácter autónomo e identidad propia de cada región, se desarrollaría la competencia, y esta entregaría a las personas una opción de movilidad, pudiendo de mejor manera y si lo estiman necesario, migrar a otras regiones que representen mejor sus intereses; en otras palabras la posibilidad de votar con sus pies.

Considerar y explorar la posibilidad de implementar en Chile un sistema federal es dar serios pasos hacia la ampliación de la hoy todavía inmadura democracia, un crecimiento con mayor igualdad, y la entrega a todos los ciudadanos del derecho de autogobernarse dinámica y representativamente.

Pero por sobre todo, el considerar un sistema federal entregaría un norte y una finalidad tangible a los debates referentes a la participación ciudadana, la descentralización y el crecimiento que hoy toman lugar en Chile.

La contracción del gobierno central, es el único camino para expandir el protagonismo regional y facilitar así el del individuo.

2. Regionalismo en Chile: ¿Empate, Local o Visita?

Eduardo Vergara Bolbarán (La segunda.cl, 25. Dic.2005)

"En el corto plazo sería irresponsable el pretender autonomía absoluta para las regiones y esperar transformar a estas en algo similar a los estados de los Estados Unidos o de países Europeos. Sin embargo, es tiempo de fortalecer de mayor forma las instituciones regionales y su capital humano, dar paso a un mayor florecimiento de la democracia local y entregar la confianza para que estas comunidades puedan tomar sus propias decisiones de acuerdo a su identidad y necesidades. "

El principal mensaje que trajo consigo la modernidad fue que el individuo y su comunidad directa pueden ser más independientes de estructuras centrales.

Las nuevas tecnologías y los avances contemporáneos han entregado a las sociedades mayor autonomía de acción, mayor acceso a servicios, integración, dinamismo y sin duda mayores niveles de democracia.

Sin embargo en Chile, y a diferencia de otros países del mundo, el mensaje de la modernidad no ha traído el grado de independencia que se necesita para crear regiones, ciudades y comunidades que gocen de mayor autonomía del estado central.

En otras palabras una descentralización que permita a los individuos encontrar por si solos respuesta a dos grandes interrogantes: ¿Quiénes somos? y ¿Cómo vivimos juntos?

Las respectivas respuestas ayudan a las comunidades vislumbrar cual es la mejor manera de crear sociedades que se acerquen más a lo que de verdad somos y el rumbo que debemos tomar hacia el futuro.

Las dos preguntas anteriores, por muy simples que parezcan, son fundamentales al momento de planificar el país que queremos en el futuro.

Las regiones no solo deben ser lugares de residencia, recreación y de actividad económica, sino que lugares que fomenten ciudadanos activos e informados con las herramientas y capacidad productiva para generar riquezas y autoridad para gobernar sus propias vidas de una manera mas independiente dinámica y libre.

Esta es la independencia que realmente tiene que buscar el Chile moderno, un país que debe cortar el cordón umbilical al paternalismo y comenzar a preocuparse por entregarles a todos sus ciudadanos efectivas herramientas para lograr un desarrollo igualitario y con identidad.

En primer lugar, es necesario aumentar las hoy limitadas estructuras y privilegios de los gobiernos regionales.

El Intendente y los consejeros regionales deben llegar a sus cargos como producto de elecciones populares, lo que los obligaría a tener plataformas y encontrar vías para legitimizar su gobernabilidad.

Esta necesidad también recae en la Región Metropolitana, la que necesita un gobierno con mayor autonomía y dinamismo para enfrentar sus enormes desafíos administrativos.

En el mismo contexto es necesario descentralizar los partidos políticos existentes para así generar expresiones y liderazgos poderosos acordes a la realidad de cada región.

A la vez, es imprescindible modificar la ley actual de partidos políticos que impide el nacimiento de partidos exclusivos de regiones.

Esta ley coarta la posibilidad de crear partidos políticos regionales que desarrollen liderazgos representativos y terminen con los oportunismos electorales que muchas veces poseionan individuos que tiene pocos o nulos conocimientos del lugar que representan, gatillando muchas veces, un servicio público irresponsable y poco legítimo.

En segundo lugar, se debe garantizar que las iniciativas de emprendimiento microempresarial no serán arrolladas y absorbidas por un modelo económico que potencia los monopolios comerciales.

La preservación y potenciamiento de negocios locales conserva la identidad local y entrega dinamismo a las comunidades que han sido violadas por los mega establecimientos que se instalan abruptamente en medio de espacios públicos, centros cívicos y comunidades.

Por otro lado, la presencia de negocios pequeños y micro empresas aumentan el capital social, dispersan el capital económico y la toma de decisiones en comunidades locales se vuelve más transversal, representativa y democrática.

En tercer lugar esta la importancia de construir identidades regionales. Para esto, gran parte de los recursos económicos generados por las regiones deben transformarse en inversión para ellas mismas. La identidad se construye no solo potenciando lo ya existente sino que innovando en torno a la realidad de cada región.

Las regiones deben tener más control y recursos para iniciativas educacionales, culturales, científicas, tecnológicas, de infraestructura y de integración internacional.

Al mismo tiempo, las regiones deben ser capaces de generar alternativas atrayentes que terminen con la fuga de cerebros que mayormente decanta en la capital y fuera de nuestro país.

En el corto plazo sería irresponsable el pretender autonomía absoluta para las regiones y esperar transformar a estas en algo similar a los estados de los Estados Unidos o de países Europeos.

Sin embargo, es tiempo de fortalecer de mayor forma las instituciones regionales y su capital humano, dar paso a un mayor florecimiento de la democracia local y entregar la confianza para que estas comunidades puedan tomar sus propias decisiones de acuerdo a su identidad y necesidades.

El periodo anterior a la segunda vuelta electoral es el momento propicio para que los candidatos adquieran compromisos concretos con cada una de las regiones del país. Al mismo tiempo nuestros nuevos representantes en el parlamento deberán

comprometerse por aprobar y generar políticas públicas que potencien una regionalización real que entregue autonomía tanto económica como política a cada una de las regiones de Chile.

Durante este nuevo periodo de gobierno será fundamental el reducir el poder del estado y ampliar el de las regiones, de lo contrario, seguiremos viendo como Santiago crece y las regiones siguen jugando de visita.

3. Intendentes y democracia regional

Eduardo Vergara Bolbarán, Abril 2006.

"Figuras como los Intendentes deben ser llevados a sus cargos gracias a la voluntad de la gente y no a los planes centralistas de un diseño institucional arcaico, egoísta y poco representativo".

Luego del innecesario y vergonzoso *impasse* que tomó lugar tras las designaciones de los nuevos Intendentes, salió a la luz una vez más uno de los temas que silenciosamente han ignorado los últimos tres gobiernos de la Concertación: el método antidemocrático por el cual los máximos líderes políticos regionales llegan a sus cargos.

Estas designaciones son una burla para la ciudadanía, ya que coartan a ella del derecho a elegir a sus líderes, de ampliar los espacios de participación y de ser gobernados por líderes que gracias a la legitimización adquirida tras un triunfo electoral y la elaboración de plataformas electorales propias, actúen libres de muñequeros políticos y lejanos del paternalismo de una continuidad de gobierno que teme a la descentralización real.

La designación de intendentes es una costumbre que Chile acarrea desde los tiempos de la Colonia, y que gracias al heredado corazón centralista y fuerte sistema presidencialista se ha consolidado como una necesidad para que el Presidente(a) extienda su poder en las regiones.

Sin embargo, y dada la gran necesidad de una descentralización política real y agresiva, en el corto plazo se debe entregar a la ciudadanía el derecho de elegir a sus intendentes y consejeros regionales (CORES), potenciar liderazgos locales y construir regiones con mayor autonomía e identidad propia.

La modernización del Estado, la globalización, y la eminente necesidad de aumentar la participación electoral en el país, son algunos de los factores que llaman a una descentralización política que entregue mayor autonomía a los territorios regionales.

Cabe destacar que la palabra territorio deriva de raíces latinas *terra* y *torium* que significan la tierra que pertenece a alguien. En otras palabras, un concepto que entrelaza vínculos de poder, pertenencia, apropiación, participación y dominio entre un área geográfica específica y el individuo.

Es por esto que la administración regional debe ser legitimizada antes de ejercer poder, lograr una cercanía antes de generar espacios de participación más directa y redefinirse con identidad propia antes de liderar el territorio a enfrentar los desafíos locales y globales.

Pero volvamos al análisis del rol de los Intendentes.

La mantención del orden público, el transporte, la educación, la cultura y los planes de descontaminación, entre otras materias, son políticas de directa competencia del Intendente.

Estas políticas no pueden ser administradas desde la lejanía de los planes administrativos elaborados por el poder central, sino que deben ser administrados gracias a diseños de políticas públicas específicas para las necesidades de cada región, sus comunas y su gente.

La designación de Intendentes en nuestro país, y dadas las características anteriormente mencionadas, posiona individuos que muchas veces poseen bajos conocimientos y visión sobre las necesidades de la región, que junto a un CORE muchas veces limitado de independencia de acción y representatividad, Gobernadores análogamente investidos y SEREMIs designados bajo similares características de cuoteo, transforman la administración regional en un aparato disfuncional que no esta acorde a las necesidades del Chile moderno y que reclama enérgicamente una reforma.

No todos los gobiernos regionales caen en esta descripción, pero por muy capaces que estos lleguen a ser, el no ser elegidos directamente por el pueblo les resta enorme credibilidad y capacidad de acción.

Otro aspecto importante a considerar, es la oportunidad que el ampliar la democracia a niveles regionales genera para el nacimiento de liderazgos locales y partidos políticos regionales.

Los partidos políticos en Chile y en el mundo se encuentran en una situación de crisis al estar perdiendo credibilidad y membresía gracias a la aparición de organizaciones que han sido capaces de fomentar la participación ciudadana por medio de canales alternativos y mas específicos que muchas veces logran captar realidades locales de manera mas efectiva y directa (Atina Chile, Expansiva, Blogs, etc).

Sin embargo, los partidos políticos son fundamentales en el funcionamiento de toda democracia, y si a nivel nacional no han logrado descentalizarse, terminar con las oligarquías y las democracias internas (factores que generan el desencanto de la ciudadanía), el nacimiento de estos a nivel local emerge como la alternativa para mantenerlos a salvo y aumentar la participación por medio de ellos.

El marginar a los gobiernos locales y los habitantes de las regiones de la democracia es un paso pendiente hacia la modernización de Chile y la integración global.

Si bien la elección directa de los líderes regionales como los Intendentes y los Consejeros son pasos fundamentales para alcanzar esta meta, estos deben ir acompañados de un paquete de

reformas descentralizadoras como son la modificación en la ley de partidos, la entrega de mayor autonomía fiscal a los territorios, la generación de más oportunidades de participación cívica directa a sus habitantes, entre otras.

Con ello también se deben considerar nuevos mecanismos de democracia directa para las regiones, como son nuevas tecnologías de participación, la toma de decisiones locales por medio de referéndums, la evaluación pública de los servicios y la elaboración pública de presupuestos específicos para cada territorio.

El gobierno de Bachelet debe asumir su compromiso de descentralizar Chile y debe demostrar que no teme a entregar mayor poder de decisión a los chilenos.

Mientras el servicio público se profesionaliza terminando así con parte de los cuoteos, favores y premios de consuelo político, figuras como los intendentes deben ser llevados a sus cargos gracias a la voluntad de la gente y no a los planes centralistas de un diseño institucional arcaico, egoísta y poco representativo.

4. Presupuestos participativos y promesas inconclusas

Eduardo Vergara Bolbarán (*)

"Michelle Bachelet reiteró, durante su primera cuenta pública, su 'compromiso más profundo con la descentralización, con los ciudadanos de regiones y comunas.' Lamentablemente, y hasta el momento, el comprometerse no ha sido suficiente. Hoy, algunas regiones del país son todavía sectores segregados del poder de decidir, carentes de espacios democráticos desarrollados y marginados del crecimiento del cual el país se disfraza con orgullo... De la mano con la necesidad de elegir a nuestros líderes regionales de manera directa existen también otros métodos por los cuales la ciudadanía debe ejercer su inalienable derecho a participar y decidir".

Aparentemente el compromiso del actual gobierno con la descentralización sigue en pie. Si bien hasta el momento la Concertación no ha logrado llevar al país hacia una descentralización adecuada, Michelle Bachelet reiteró, durante su primera cuenta pública, su 'compromiso más profundo con la descentralización, con los ciudadanos de regiones y comunas.'

Lamentablemente, y hasta el momento, el comprometerse no ha sido suficiente. Hoy, algunas regiones del país son todavía sectores segregados del poder de decidir, carentes de espacios democráticos desarrollados y marginados del crecimiento del cual el país se disfraza con orgullo. Porque ahí, donde se forja la cohesión del Chile que ambiciona la Concertación, todavía los ciudadanos hacen su vida cotidiana ajenos a su derecho de participar en la elaboración de las políticas públicas que tanto les afectan.

De la mano con la necesidad de elegir a nuestros líderes regionales de manera directa existen también otros métodos por los cuales la ciudadanía debe ejercer su inalienable derecho a participar y decidir.

Uno de ellos es la elaboración de presupuestos participativos en todas las municipalidades del país. Los presupuestos participativos son una práctica de gestión urbana en la cual los ciudadanos, a través de diferentes órganos y procesos, deciden en qué y cómo se gasta el dinero público.

Estos generan nuevas vías de comunicación entre los gobiernos locales para así originar mayor eficiencia en la administración pública, para llegar a una redistribución igualitaria de los recursos y para desarrollar espacios participativos que fortalezcan las iniciativas ciudadanas.

A partir de los escritos de Marx hasta las ideas de los analistas más modernos de la sociedad, como Nohlen, la no participación es identificada como un factor de inmovilismo que genera clases segregadas y oprimidas. La participación ciudadana es un factor fundamental para el funcionamiento democrático y representativo de los gobiernos locales. Por medio de ésta, los diferentes actores que giran en torno a estos gobiernos, adquieren un grado de protagonismo en la formulación de políticas públicas que les afectan, transformándose en una poderosa herramienta de poder, que les entrega una nueva forma de influenciar de manera directa en la planificación de su vida.

Desde Porto Alegre en Brasil hasta las exitosas experiencias de Sevilla y Córdoba en España, los presupuestos participativos han entregado a sus ciudadanos nuevas instancias de participación en las decisiones que les atañen y nuevos espacios para el desarrollo de comunidades más democráticas.

En otras palabras, están cumpliendo con el anhelo de Tocqueville de hacer del municipio una escuela de la democracia.

Al mismo tiempo en Chile han tomado lugar similares experiencias en municipios como Cerro Navia y Talca. Sin embargo, los presupuestos participativos se deben transformar en una práctica que se extienda a todos los rincones del país.

Pero para que la participación ciudadana se amplíe e iniciativas como los presupuestos participativos sean exitosas, es necesario crear los mecanismos por medio de los cuales se permita un verdadero intercambio entre la sociedad civil y el poder establecido.

Esto se transforma en un doble compromiso que debe ser llevado adelante gracias a la acción compartida de los diferentes actores que giran en torno a los gobiernos locales.

Mientras la participación requiere que el sector público se abra, genere información y establezca espacios y mecanismos que acojan las preocupaciones, necesidades y propuestas provenientes de la ciudadanía, estas instancias de participación también exigen la presencia de una ciudadanía que se involucre en los asuntos públicos de manera activa y responsable.

La descentralización política y la ampliación de los espacios de participación son pasos fundamentales para que Chile llegue a ser una sociedad moderna en el 2010.

El modelo centralista y el fuerte presidencialismo son prácticas agotadas que no están acordes a las metas del país. Un crecimiento más equitativo solo se lograra devolviendo atribuciones a las regiones y entregando a la ciudadanía no solo el poder de decidir de mayor manera sobre sus propias vidas, sino que también, herramientas para forjar una ciudadanía con fundamentos cívicos fuertes y herramientas de participación efectivas. En Chile todos tenemos derecho a participar en la elaboración de los presupuestos públicos y actuar de manera directa en la toma de decisiones de que y como gastamos los recursos que a todos nos pertenecen.

*Cientista Político University of Pórtland, EEUU
Estudiante Master en Ciencia Política, California State University Long Beach
Investigador Visitante, Instituto de Iberoamérica y Portugal, Universidad de Salamanca.
www.eduardovergara.cl

